

NOMENCLATURA : 1. [40]Citación para oír sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Iquique
CAUSA ROL : C-3233-2018
CARATULADO : FREZ/ROMERO

Iquique, siete de abril de dos mil veinte.

VISTO:

A folio 1, comparece doña **STEPHANIE GALLARDO ALARCÓN**, Abogada, domiciliada en calle Sotomayor N°625, oficina N°311 Edificio Contadores, Iquique, en representación de doña **JOCELYN MACARENA FREZ ORMEÑO**, soltera, cesante, domiciliada en Calle Santa Isabel N°3688, departamento N°506, Torre A1 Sur, de Alto Hospicio, quien interpone demanda de Indemnización de Perjuicios en sede Extracontractual en contra de **CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A., CENCOSUD RETAIL S. A., JUMBO SUPERMERCADO ADMINISTRADORA LTDA, JUMBO ADMINISTRADORA NORTE S.A.**, todos representados por el Sr. Hugo Oyarzo Castro, desconoce profesión u oficio, o por quien ejerza tales cargos al notificarse la demanda, y en contra de doña **LILIAN ADELA BRACHO OSVALDO**, desconoce profesión u oficio, y de don **ALEX PATRICIO ROMERO ESPARZA**, desconoce profesión u oficio, todos domiciliados en calle Héroes de la Concepción N° 2855, Iquique.

Expone que su mandante el 3 de mayo del 2011, ingresó como cajera a trabajar para la demandada, la cual tiene un sistema Holding o consorcio empresarial multifuncional, conocido como Retail Cencosud.



Indica que al mes, la ascienden a pre-bóveda como encargada de recaudar los fondos de las cajas del supermercado, siendo 4 personas las encargadas, además realizada los retiros de dinero directo en la caja y los cuadraba con las ventas del día, para luego depositarlos en el banco, concurriendo en julio del 2016, a una capacitación en Santiago por 2 semanas por un cambio en el sistema de cajas que se realizaría en enero del 2017, lo que implicaría que la labor se realizaría por solo dos trabajadores.

Indica que su representada, debido a un embarazo ectópico, estuvo con licencias médicas, aproximadamente desde enero a finales de febrero del 2017, y que en abril del 2017, el señor Patricio Saini, subgerente del supermercado, le señala que se encargaría de una nueva área, y que el 24 de abril del 2017 firmaría el anexo de contrato.

Relata que el 21 de abril del 2017, su mandante ingresó a trabajar en el turno de la tarde, realizando sus funciones habituales, recibiendo los dineros de las ventas, cuadrando las cajas, y realizando los depósitos en el banco, dirigiéndose a colación por 30 minutos; agrega que aquel día en el área, donde normalmente son 2 personas, su mandante se hallaba sola, y como era viernes, cubría el puesto de “sencillo” que está a unos 2 ó 3 metros de distancia de la pre-bóveda, turnándose para cubrir esos puestos, relevando a su compañera Laura Rubilar para que fuera a colación, quien se demoró más de lo normal, retrasando el trabajo de su representada.

Señala que cerca de las 20:00 horas, su mandante se dirigió al sector de cajas en conjunto con el guardia Pedro Garrido para hacer retiro de los dineros, cuyo monto superior era de \$ 50.000, y que el guardia anotaba independiente a su representada, las cantidades



entregadas por cada cajero, contabilizando, y armando en montones de \$100.000, ingresándose el total al sistema, quedando un Voucher de respaldo para el cajero y otro para la actora como recaudadora, ingresándose el dinero a un balín -especie tubo- enviado por un sistema de tuberías por aire lo cual llega directo a pre-bóveda. Afirma que su representada comenzó a revisar que las cantidades indicadas e ingresadas en caja estuvieran cuadradas, y que no hubiera diferencia, todo grabado por la cámara de seguridad del lugar y monitoreada por un guardia en todo momento, quedando cuadrados todos los movimientos del turno de ese día.

Señala que la actora depositó los dineros con su nombre y firma, y agrega que si en el depósito hay menos dinero o un billete falso, lo repone quien deposita ese dinero, y al día siguiente, la recaudadora de turno debe verificar la venta del local con lo físico, es decir: efectivo- cheque- transbank- notas de débito y de crédito.

Señala que aquel día, la administradora de turno, doña Doris Gatica, se dirige hacia la demandante, siendo la encargada de embolsar todos los dineros, lo que contempla ingresar todos los paquetes de dinero depositados a una bolsa más grande, para ser guardados en una caja fuerte, y al día siguiente, la empresa de retiro de valores los lleva al banco.

Adiciona que aquél día, su mandante se había colocado un sostén con el bretel suelto, y que al ingresar al turno, no dispuso de tiempo para arreglarlo, por lo que lo acomodó sin sacarse la polera, y cuando se retira la administradora durante aproximadamente 15 a 20 minutos, se dirige al baño a lavarse las manos por el polvo que dejan los billetes, y concurre a comprar artículos personales, contando con



permiso para ello, siendo las recaudadoras las últimas en retirarse de todo el personal de cajas, adquiriendo los bienes con la tarjeta cencosud, ya que no podía manipular dinero en efectivo dentro del local, a menos que, fuera sellado en un sobre y contabilizado por un guardia de seguridad al ingresar al turno siguiente.

Sostiene que su mandante se retiró a las 23:45 horas aproximadamente, y que un guardia le informó que debía esperar a seguridad, llegando el guardia Pedro Garrido, quien le informa que está detenida a la espera de que llegara Carabineros por haber sustraído un monto indefinido de dinero en el lugar de trabajo, y existía un video que así lo comprobaba, sin que quisieran revisarla o consultarle sobre el hecho, ni exhibirle la grabación, ni cuadrar los dineros, ni revisar los depósitos.

Señala que también detuvieron a la supervisora de cajas, doña Angélica Chamorro, por no haber informado \$10.000 al ingresar a su turno, a quien si revisan, encontrándole dinero, pero sí se fue a casa, mientras que su mandante, siguió esperando a Carabineros para ser llevada a control de detención.

Indica que mientras esperaba, llamó a la ex Sub jefa doña Elizabeth González, quien se comunica con doña Milena González, Jefa de Cajas, quien manda a que su representada fuera a cuadrar al supermercado los dineros trabajados, pero agrava la situación, ya que indica que “no es necesario”, e insinúa que sí había robado aquel dinero.

Indica que al llegar Carabineros, pasan a la oficina de guardias, y al salir, le informan a su representada que está siendo detenida por el delito de hurto de dinero en su lugar de trabajo, negándose ésta,



implorándoles a los funcionarios, se niega a ser detenida, dado que no era cierto el hecho del cual la estaban acusando infundada e injustamente, incluso, le implora a Carabineros que la revisen, es aquí cuando su mandante realiza una llamada telefónica en el baño del supermercado a su hermana quien vive en Arica, acompañada en todo momento por personal de Carabineros, su hermana, quien es abogada, le indica que no puede negarse a la detención y que guarde todas las pruebas que ella pudiera obtener, además, le indica que enviaría a un colega de la ciudad que conocía para que tomara el caso. Luego Carabineros le quita el celular e intentan esposarla; su representada, confundida, se niega a pesar de los consejos de su hermana, pero fue totalmente inútil, Carabineros utilizó su fuerza, le dejaron marcados los brazos y manos, qué, dicho sea de paso, dicha actuación caótica de la detención fue porque el Sr., Antonio López, jefe de los guardias le indicó en reiteradas oportunidades que utilizaran la fuerza pública para el arresto. Todo esto en presencia de sus compañeros de trabajo, quienes no pudieron hacer nada, su representada frustrada e impotente en aquel momento, se sentía ya sin fuerzas, ya que ni siquiera le salía voz, se sentía emocional y físicamente muy mal, pero ella se mantenía en pie y afrontando la confusa situación que estaba vivenciando.

Agrega que al llegar a la comisaría, había una Carabinera quien la lleva al baño para revisarla, la obligó a sacarse toda la ropa, incluso sus cuadros, para luego agacharse y pararse para corroborar que no traía nada de lo supuestamente hurtado y guardado en su cuerpo. Señala que en las pertenencias de su representada nada se halló, como así mismo en su cuerpo.



Expresa que la pareja de su representada, don Ricardo Guzmán, a eso de las 03:00 de la madrugada le lleva ropa, que, además, en aquella fatal y confusa noche tuvo que llevar a su hija - 4 años de edad -, debido a que en la región no cuentan con red de apoyo de familiares para confiar a su hija. Luego llevan a su representada al calabozo, en aquel lugar estuvo con varias personas.

Refiere que a la mañana siguiente la llevan a control de detención, esposada en todo momento, al ingresar a dicha audiencia de control de detención, el Juzgado de Garantía, fijó un plazo de 90 días para la investigación sobre los hechos de los que se acusaba a su mandante.

Relata que ese día sábado, su representada tenía turno de tarde, por lo que concurre a su departamento a darse un baño, se colocó uniforme y se presentó a trabajar, tal como lo había hecho desde que ingreso a prestar servicios. Señala que no la dejaron ingresar a trabajar y que acto seguido se le hace entrega por parte de la Sra. Claudia Acevedo de Recursos Humanos y la Sra. Doris Gatica, subgerente, de un documento en el cual indica que tiene 05 días de permiso con goce de sueldo, y que volviera a trabajar el día 28 de abril del 2017.

Expone que en estos cinco días de descanso otorgado, su mandante sólo recuerda haber estado acostada en su cama sin salir de su habitación, frente a este grave escenario se dirigió hacia un médico psiquiatra con el fin de obtener ayuda para sobrellevar todo este embrollo. El médico especialista le hace entrega de recetas de medicamentos y, además, le otorga licencia médica la cual no quiso hacer efectiva, dado que, su mandante aún seguía creyendo que estos



pedirían disculpas. Manifiesta que alcanzó a estar en el turno aproximadamente media hora y la llama el gerente el Sr., Hugo Oyarzo a su oficina, es ahí en donde la desvincula verbalmente, leyendo la carta, situación que también fue grabada por su mandante, dicha desvinculación se amparaba en virtud de lo prescrito en el artículo 160 N° 1 del Código del Trabajo.

Agrega que su representada concurrió a la inspección del trabajo con el fin de presentar el correspondiente reclamo, y le dan una fecha para comparecer al llamado de conciliación. El día 19 de mayo del año 2017, día del comparendo llevado a cabo en dependencias de inspección del trabajo, es cuando la demandada le ofrece a su mandante pagarle lo que correspondía, aproximadamente seis millones de pesos, y sumado a ello, cambiando la causal de mutuo acuerdo contemplada en artículo 159 N°1, del Código del Trabajo.

Respecto de los antecedentes vivenciados en el ámbito penal, señala que la denuncia de fecha 21 de abril del año 2017, en cuanto a la relación de los hechos, en el párrafo 4to expone el Carabinero a cargo de la denuncia lo siguiente: “Se hace presente a esa Fiscalía que la detenida fue revisada en la sala de imputados de la 1ra., Comisaria de Carabineros de Iquique, por la Carabinero María Angélica Baeza Escalona, la cual manifiesta no haber encontrado ningún dinero entre sus vestimentas”. A su vez, en misma denuncia en párrafo 7mo, expresa: “ANTECEDENTES PENALES: Se consultó por los antecedentes penales del detenido, a través de la base de datos del registro civil e identificación, arrojando no mantener causas vigentes”.



Amén de lo anterior, manifiesta que con fecha 28 de mayo del año 2018, existe sentencia en causa RUC N°1700375699-8 RIT N°191-2018, en donde se desprende lo siguiente en la parte resolutoria del fallo: “SE ABSUELVE a JOCELYN MACARENA FREZ ORMEÑO, ya individualizada, de la imputación como autora de un delito de hurto, supuestamente perpetrado en esta jurisdicción el 21 de abril de 2017, en perjuicio de Supermercado Jumbo Iquique, le dirigiera el Ministerio Público, con costas”.

Manifiesta que de lo anterior, en fechas distintas, esto es, 21 de abril de 2017 -denuncia- y 28 de mayo de 2018 -sentencia Juzgado Oral en lo Penal de Iquique-, la demandada tuvo siempre la oportunidad para haber revisado, investigado, ejecutado todas aquellas providencias necesarias hasta obtener reales pruebas, y verificar si es que se cometió tal ilícito para la acusación que se pretendía contra su mandante, por ende, su representada tuvo que vivir atormentada, cargando con una acusación la cual jamás cometió, por más de un año.

En cuanto a los elementos de la responsabilidad extracontractual refiere que el acto ilegal y arbitrario que hubo por parte de las demandadas contra su representada, demuestra que no cabe duda alguna del actuar doloso y/o culposos de las demandadas, en cuanto se tuvo la intención directa de dañar y/o perjudicar a su representada, quienes evidentemente generaron un magno daño al inculparla de algo que ella jamás cometió, dañándola al punto de tener que cargar un poco más de un año con una falsa acusación. Y donde, además, tuvo que vivenciar un proceso penal el cual nadie quisiera vivir, y del cual aún permanecen intactas las heridas que se provocaron con



ocasión de la acción, arbitraria, ilegal e injusta en contra de su representada.

En concordancia con lo anterior, expone que la acción arbitraria e ilegal, es totalmente imputable a culpa o dolo de las demandadas, ya que, con su acción de denunciar infundada e injustificadamente, las demandadas tenían la intención real y directa de provocar un gran daño a la demandante de autos.

En cuanto al requisito relativo a que el autor sea capaz de cometer delito o cuasidelito civil.

Señala que la capacidad cuasidelictual del autor, como segunda exigencia de la responsabilidad extracontractual, arranca de la sola circunstancia de que, en nuestro ordenamiento jurídico, la incapacidad es una circunstancia excepcionalmente regulada.

Respecto a que el hecho u omisión cause un daño a la víctima, refiere que el actuar ilegal y arbitrario de las demandadas consistente en el hecho de haber realizado una denuncia carente de toda prueba y sin fundamento alguno; y sumado a lo anterior, el hecho de agravar la situación al llegar el día de audiencia de control de detención de su representada y, ofrecer, a sabiendas que no era cierto, real y efectivo una salida alternativa de que su mandante renunciara a su derecho legal como trabajadora en aquel entonces, perdiendo así su pago por años de servicio, dicho acto ilegal y arbitrario claramente ha afectado el derecho máspreciado que cualquier ser humano posee, esto es, su derecho a la integridad psíquica, derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia consagrados en nuestra Constitución Política de la Republica, y generando además, daños en el patrimonio de su representada.



Manifiesta en cuanto a los daños sufridos por su mandante, que su representada, ha sufrido un daño patrimonial cierto, real y efectivo, el que detalla de la siguiente manera:

a) Daño Emergente: Por este concepto se solicita la suma de \$3.590.000.- (tres millones quinientos noventa mil pesos), dicho monto corresponde a los costos erogados en profesionales especializados como psiquiatra, psicólogo, y defensa privada de abogado en área penal.

b) Lucro Cesante: Por este concepto se solicitan las ganancias -salarios en su calidad de recaudadora- que se dejaron de percibir una vez que esta fue acusada injusta, ilegal y arbitrariamente de un hecho que no cometió, refiere que dichas liquidaciones de sueldo eran variables, por tanto, se solicita la suma de \$9.100.000.- (nueve millones cien mil pesos), o bien, la suma que el tribunal estime conforme a derecho.

En cuanto al daño moral expresa que su representada ha sido víctima de una grave lesión, esto es, ser víctima de actos ilegales y arbitrarios que la denigraron como persona, la trataron como una vil delincuente sin primero esclarecer los hechos de una acusación infundada. Explica que este sufrimiento conlleva un gran dolor emocional, el cual degeneró en un daño psicológico importante, toda vez que su mandante jamás imaginó en su vida estar envuelta en una situación tan traumática como la vivenciada, sobre todo, tomando en consideración que tuvo que pasar una noche entera en vela a la espera de un control de detención, que, además, se suma el hecho de tener que haber vivenciado una situación de registro “personal”, en donde una funcionaria de Carabineros tuvo que solicitarle “sacar su



ropa, incluyendo sus prendas personales para hacerle una revisión acuciosa para saber si ocultaba dinero en sus pertenencias”. Además de ser una conducta reprochable.

Señala que se trata de un menoscabo tan grande, el cual jamás podrá ser reparado, los episodios vivenciados por más de un año en sede penal, jamás serán olvidados, en este sentido no cabe duda que el daño moral sufrido y que ha repercutido a nivel familiar ha sido realmente enorme, atendido todo lo expuesto, el concepto que demanda su mandante, se traduce en la suma de \$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos) o en subsidio la suma que el tribunal estime conveniente, según el mérito de autos y en justicia otorgar.

En cuanto a la relación de causalidad entre el hecho u omisión dolosa o culpable y el daño causado a su representada, señala que éste obedece exclusivamente al actuar de la demandada, por cuanto es quien debe asumir la responsabilidad y reparar los daños provocados a la actora, ya que esta última ha tenido que soportar un largo proceso judicial y cargar con una grave acusación, que más allá de existir una sentencia absolutoria, ya no es posible borrar en el tiempo lo ocurrido.

Por último, respecto a la obligación resarcitoria, alega que esta se configura totalmente, toda vez que entre el hecho doloso, consistente en una acusación gravosa, sin pruebas y que dio inicio a un largo proceso penal, el vivenciar una noche en el calabozo, el ser tratada como “delincuente”, sumado al hecho de quedar sin una fuente laboral, ha hecho que su representada quedara con secuelas de no querer ingresar a un nuevo trabajo por miedo a tener algún tipo de



problemas, miedo de salir a lugares públicos donde haya presencia de Carabineros, por temor de volver a ser ingresada a una comisaria.

Por lo tanto, al mérito de lo expuesto y previas normas que indica, solicita se condene a los demandados en forma separada, conjunta o solidaria a pagar la cantidad de \$47.690.000.- (cuarenta y siete millones seiscientos noventa mil pesos), cuyos montos detallados se hallan en la presentación; o bien la suma que se estime pertinente conforme al proceso, la prueba ofrecida y rendida en la etapa procesal pertinente, más los reajustes e intereses que se devenguen hasta el momento de hacer efectivo el integro pago, y de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más costas.

A folio 40, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de los demandados.

A folio 42, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reiterando todos los antecedentes de hecho y derecho vertidos en la demanda.

A folio 45, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, haciendo consideraciones previas respecto a la notificación de la demanda, pues alega que la demandante con fecha 28 de agosto de 2018, interpone una demanda en contra de Cencosud Supermercados S.A., Cencosud Retail S.A., Jumbo Supermercado Administradora Limitada, Jumbo Administradora Norte S.A., doña Lilian Adela Bracho Osvaldo y de don Alex Patricio Romero Esparza, basándola en una supuesta conducta calificada como ilegal y arbitraria por parte de Cencosud; según el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, el plazo para contestar la demanda en el evento que exista pluralidad de demandados comenzará a correr desde que se practique la última



notificación, en este caso respecto a la Sra. Liliam Adela Bracho Osvaldo, el día 26 de febrero de 2019.

Hace presente que el receptor judicial para notificar a doña Liliam Bracho Osvaldo, retiró digitalmente la demanda el día 26 de febrero de 2019, para luego devolver el expediente junto al estampado el día 01 de abril de ese año, es decir, un mes y 4 días de efectuada la diligencia, cuando el plazo para contestar ya se encontraba vencido; agrega que cabe señalar que según el inciso segundo del artículo 9 de la Ley de Tramitación Electrónica, los receptores judiciales deben dar cuenta de la actuación realizada dos días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la diligencia; pues claramente el receptor no cumplió dicha norma lo que conllevó a la imposibilidad de poder comparecer dentro de plazo para contestar la demanda, quedando como rebelde, por lo que viene en evacuar el trámite de la dúplica manifestando que la demandante junto con Jumbo Supermercados Administradora Limitada, concurren a la inspección del trabajo el día 17 de mayo de 2017, donde se celebró el comparendo de conciliación, en dicha instancia la demandante expresó los montos reclamados y la causal de despido, por lo que Cencosud ofreció el cambio de causal por mutuo acuerdo de las partes y el pago total de las sumas reclamadas, arribándose a una conciliación, en donde firmaron el respectivo finiquito ratificado ante el inspector conciliador, sin reservas o cuestionamientos respecto del contenido de dichos documentos, reconociendo claramente la actora que le otorga “el más amplio finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.”



En cuanto a la multiplicidad de demandadas, esgrime que de las 4 sociedades, sólo la sociedad Jumbo Supermercado Administradora Limitada tiene relación con la demandante y fue con quien suscribió el finiquito del contrato de trabajo de fecha 17 de mayo de 2017; alega que sin perjuicio de que la presente demanda debe ser rechazada por existir un finiquito y conciliación sin reparos y a su vez por no darse los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, también debe ser rechazada por no existir vínculo entre la demandante y las demás sociedades demandadas.

Señala que al haberse firmado un finiquito con la demandante, se dio por terminada la relación jurídica que los unía, además el haber aceptado la actora el cambio de causal por mutuo acuerdo de las partes revela que ésta renuncia en dicho acto a interponer una acción en contra de su representada, pues no existe antecedente que justifique un actuar doloso o culposo en sede extracontractual, dado que no se puede sostener que exista alguna conducta que haya causado daño, si la misma demandante reconoce que la relación terminó por mutuo acuerdo de las partes.

Respecto al cumplimiento de los presupuestos para la procedencia de la responsabilidad civil en sede extracontractual, indica que la demandante debe probar cada uno de estos requisitos, siendo el primero de estos que exista una acción u omisión imputable por parte de un agente capaz, pues descarta que el actuar de Cencosud haya sido arbitrario, ilegal derivado de un actuar doloso y culposo que se haya orientado a causar daño a la demandante, ya que ésta solo llevó a cabo los protocolos de seguridad con la finalidad de resguardar sus intereses, ya que en base a las imágenes de video procede



conforme a derecho y de manera objetiva, informando la situación a la demandante para luego llamar a Carabineros de Chile, para que ellos tomaran el control del procedimiento.

Por consiguiente, expone que no habiendo una acción u omisión al respecto, no podría acogerse la acción, puesto que ésta carece de un requisito para configurar la institución de responsabilidad que pretende la actora.

En cuanto al monto de la indemnización que pretende la demandante, afirma que se han revisado cada uno de los ítems que incluye la demandante como daño emergente, siendo estos: psiquiatra, psicólogo y defensa privada de abogado en área penal, respecto a los honorarios de éste último indica que estos se devengan como consecuencia de una acción penal, de tal forma que exigirlos como daño emergente no es procedente, sino que atenta directamente contra la naturaleza de los procesos judiciales, toda vez que al revisar la causa penal RUC 1700375699-8, RIT 191-2019, seguido ante el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, existió pronunciamiento de este ítem, debiendo recurrir en tal instancia para perseguir el pago de costas personales y no demandar en sede civil de manera supletoria.

Por otra parte insta a la contraparte, a acreditar fehacientemente con antecedentes escritos que las sumas pactadas por dicho concepto, digan relación con lo demandado.

Alega que por lucro cesante, la demandante no aporta elementos que permitan dilucidar de qué modo este concepto es atribuible a Cencosud, ya que existe una conciliación y un finiquito en que se reconoce por la parte demandante que no se adeuda ningún concepto, por ende, no puede pretender demandar lo que supuestamente dejó



de percibir a título de salario, si suscribió un finiquito por la causal de mutuo acuerdo de las partes.

En relación al daño moral demandado, indica que no se ha aportado ningún antecedente relevante que permita configurar tan elevadísimo monto que se demanda.

Por último, expone que sobre el vínculo de causalidad entre el daño y los hechos, la actora deberá rendir pruebas fehacientes respecto al daño que alega y probar que estos derivan directamente del supuesto actuar ilegal y arbitrario que se traduce en acciones y/u omisiones imputables a su representado.

En conclusión, estima que la acción deducida adolece de carencias, por lo que debe ser rechazada en todas sus partes, toda vez que no se puede sostener que Cencosud actuara de manera ilegal ni menos, que la conducta dolosa y/o culpable se le pueda atribuir a las demandadas, en su defecto, que los daños alegados sean apreciados en las sumas indicadas, teniendo presente el consentimiento en el término de la relación laboral por mutuo acuerdo.

A folio 59, se llevó a cabo el comparendo de estilo, con la asistencia de la abogado Stephanie Gallardo Alarcón por la parte demandante y del abogado Marco Antonio Hernández Guiza, por la parte demandada Cencosud Supermercados S.A., Cencosud Retail S.A, Jumbo Supermercado Administradora Limitada y Jumbo Administradora Norte S.A.; quedando en rebeldía los demandados Liliam Adela Bracho Osvaldo y Alex Patricio Romero Esparza; llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

A folio 62, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.



A folio 129, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA TACHA OPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA EN CONTRA DEL TESTIGO RODRIGO EUGENIO RUZ LOPEZ

PRIMERO: Que la parte demandada deduce tachas en contra del testigo basado en el N°6 del artículo 358 del Código de Procedimiento 526+Civil, dado que éste señala que atiende a la demandada en su consulta particular, cobrando honorarios de \$30.000.-, por lo que la declaración del testigo demuestra un interés directo.

SEGUNDO: Que la parte demandante evacua el traslado conferido, solicitando el rechazo de la tacha deducida ya que el testigo sólo ha señalado que atiende a la demandada como profesional, mas no dice que tenga un vínculo de amistad o cercanía con la misma.

TERCERO: Que, respecto de la causal de inhabilidad esgrimida, se tendrá presente el tenor de lo dispuesto en el número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe, “Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”.

Así las cosas, el hecho de que el testigo haya declarado que atiende a la demandada en su consulta particular, no permite por si solo dar por establecido el interés en los términos que exige la norma, pues, tal como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de nuestros tribunales, debe tratarse de un interés económico, que no se ha alegado en autos, razones todas por las que la tacha se desestimaré.



**EN CUANTO A LA TACHA OPUESTA POR LA PARTE
DEMANDANTE EN CONTRA DEL TESTIGO AUGUSTO ANTONIO
LOPEZ LETELIER**

CUARTO: Que la parte demandante deduce tachas en contra del testigo basado en los N°5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, dado que éste es una persona dependiente de la demandada, quien percibe una remuneración; además el testigo indica que ha sido participe directo del juicio penal en contra de la demandante, solicitando se declare inhábil al testigo para declarar en juicio, con costas.

QUINTO: Que la parte demandada evacua el traslado conferido, solicitando el rechazo de la tacha deducida, con costas; indicando que la demandante sólo se limita en señalar los numerales, sin reproducirlos ni explicarlos. Asimismo expone, que hoy en día las I. Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema, en reiterados fallos, han señalado que todo trabajador o dependiente de quien se solicite su declaración, es hábil para hacerlo, ya que son conocedores directos de los hechos, por lo tanto, el tribunal deberá determinar si el testigo carece de imparcialidad necesaria para declarar, debiendo considerar que éste no declaró tener un interés directo o indirecto en el juicio y en su resultado.

SEXTO: Que, respecto de la causal de inhabilidad esgrimida, se tendrá presente el tenor de lo dispuesto en el número 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe, “Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”; asimismo el numeral 6 de la norma en cuestión señala



“Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”.

Así las cosas, el hecho que el testigo haya respondido que presta servicios para la demandada, no implica en sí mismo que el testigo sea inhábil, debiendo acreditarse concretamente que el testigo carezca de imparcialidad, de la misma manera el interés directo en las resultas del juicio, debe ser de carácter pecuniario en atención a lo exigido por el legislador, circunstancia que no se ha establecido ni menos se ha alegado en autos, razón por la que la tacha se desestimaré.

EN CUANTO A LA TACHA DEDUCIDA POR LA PARTE DEMANDANTE EN CONTRA DEL TESTIGO PEDRO FERNANDO GARRIDO AMAS

SÉPTIMO: Que la parte demandante deduce tacha en contra del testigo basado en los N°5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que este es una persona dependiente de la demandada percibiendo remuneración; además ha tenido participación directa en el juicio penal en contra de la demandante. Asimismo indica que el testigo carece de imparcialidad dado que el testigo colabora, ayuda y presta apoyo a la demandada para seguir menoscabando a su representada, por lo tanto, solicita se declare inhábil al testigo para declarar en juicio, con costas.

OCTAVO: Que la parte demandada evacua el traslado conferido, solicitando el rechazo de la tacha deducida, con costas; indicando que la demandante sólo se limita a señalar los numerales, sin reproducirlos ni explicarlos. Asimismo expone que hoy en día las I. Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema, en reiterados fallos han



señalado, que todo trabajador o dependiente de quien se solicite su declaración, es hábil para hacerlo ya que son conocedores directos de los hechos, por lo tanto, el tribunal deberá determinar si el testigo carece de imparcialidad necesaria para declarar, debiendo considerar que éste no declaró tener un interés directo o indirecto en el juicio y en su resultado.

NOVENO: Que, respecto de la causal de inhabilidad esgrimida, se tendrá presente el tenor de lo dispuesto en el número 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe, “Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”; asimismo el numeral 6 de la norma en cuestión señala “Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”.

Así las cosas, el hecho que el testigo haya respondido que presta servicios para la demandada, no implica en sí mismo que el testigo sea inhábil, debiendo acreditarse concretamente que el testigo carezca de imparcialidad, de la misma manera el interés directo en las resultas del juicio debe ser de carácter pecuniario, en atención a lo exigido por el legislador, circunstancia que no se ha establecido ni menos se ha alegado. Que asimismo el haber tenido calidad de interviniente o haber participado en otro proceso en sede diversa a la civil tampoco origina *per se*, una inhabilidad en el testigo que depone en estrados, razón por la que la tacha se desestimaré.

EN CUANTO A LA TACHA OPUESTA POR LA PARTE DEMANDANTE EN CONTRA DEL TESTIGO ALAN SUAREZ CAPELLO



DÉCIMO: Que la parte demandante deduce tacha en contra del testigo basado en los N°5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, dado que éste es una persona dependiente de la demandada, quien percibe una remuneración, ya que el mismo indica que trabaja dentro de las dependencias del supermercado como asistente control, por lo tanto, solicita se declare inhábil al testigo para declarar en juicio, con costas.

DÉCIMO PRIMERO: Que la parte demandada evacua el traslado conferido, solicitando el rechazo de la tacha deducida, con costas; indicando que la demandante solo se limita en señalar los numerales, sin reproducirlos ni explicarlos. Asimismo expone que hoy en día las I. Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema, en reiterados fallos han señalado que todo trabajador o dependiente de quien se solicite su declaración es hábil para hacerlo ya que son conocedores directos de los hechos, por lo tanto, el tribunal deberá determinar si el testigo carece de imparcialidad necesaria para declarar, debiendo considerar que éste no declaro tener un interés directo o indirecto en el juicio y en su resultado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, respecto de la causal de inhabilidad esgrimida, se tendrá presente el tenor de lo dispuesto en el número 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe, “Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”; asimismo el numeral 6 de la norma en cuestión señala “Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”.

Así las cosas, el hecho que el testigo haya respondido que presta servicios para la demandada, no implica en sí mismo que el testigo



sea inhábil, debiendo acreditarse concretamente que el testigo carezca de imparcialidad, de la misma manera el interés directo en las resultas del juicio debe ser de carácter pecuniario en atención a lo exigido por el legislador, circunstancia que no se ha establecido ni menos se ha alegado en autos razón por la que la tachas se desestimarán.

EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCION DEDUCIDA.

DÉCIMO TERCERO: Que a folio 1, comparece doña Stephanie Gallardo Alarcón, abogada, en representación de doña Jocelyn Macarena Frez Ormeño, quien por los motivos señalados en la parte expositiva, interpone demanda de indemnización de perjuicios en sede extracontractual, en contra de Cencosud Supermercados S.A., Cencosud Retail S.A., Jumbo Supermercado Administradora Ltda, Jumbo Administradora Norte S.A., todos representados por el sr. Hugo Oyarzo Castro, y en contra de doña Lilian Adela Bracho Osvaldo, y de don Alex Patricio Romero Esparza, solicitando se condene a los demandados en forma separada, conjunta o solidaria a pagar la cantidad de \$47.690.000.- (cuarenta y siete millones seiscientos noventa mil pesos), según el desglose indicado en la parte expositiva; o bien la suma que se estime pertinente conforme al proceso, la prueba ofrecida y rendida en la etapa procesal pertinente, más los reajustes e intereses que se devenguen hasta el momento de hacer efectivo el integro pago, y de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más costas.

DÉCIMO CUARTO: Que a folio 40, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de los demandados.



DÉCIMO QUINTO: Que la parte demandante a fin de acreditar su pretensión acompañó los siguientes medios de prueba:

Documental:

1. Idtienda, donde se registra el ingreso de caja de la demandada, esto es, el “denominado: déficit y superavit”, de fecha 21 de abril de 2017.
2. Contrato de trabajo de fecha 03 de mayo del año 2011, entre JUMBO ADMINISTRADORA NORTE S.A, y la actora.
3. Actualización contrato de trabajo de fecha 16 septiembre de 2016, entre JUMBO SUPERMERCADOS ADMINISTRADORA LTDA., y la actora.
4. Anexo de contrato de trabajo, mutuo acuerdo de las partes, 01 julio del año 2011, entre JUMBO ADMINISTRADORA NORTE S.A, y la actora.
5. Anexo de contrato de trabajo de fecha 03 de mayo del año 2011, suscrito por JUMBO ADMINISTRADORA NORTE S.A, y la actora.
6. Informe psicológico de la actora, elaborado por el perito don RODRIGO RUZ LÓPEZ, PERITO PSICÓLOGO CLINICO, de fecha 29 de junio del año 2018.
7. Copia parte denuncia de fecha 22 de abril del 2017, donde la actora aparece en calidad de “Imputada”.
8. Declaración voluntaria de testigo, Alex Romero Esparza, presencial y de oídas, de fecha 21 de abril del 2017, efectuada en Carabineros de Chile.
9. Acta de entrega de detenidos por civiles, de fecha 21 de abril del 2017, aprehensor Lilian Adela Bracho Osvaldo.



10. Acta de declaración voluntaria “aprehensor civil”, fecha 21 de abril del 2017, efectuada en la Primera Comisaria de Iquique.
11. Declaración del personal de Carabineros, de fecha 22 de abril del 2017, Primera Comisaria de Iquique, emitida por el Sargento Primero Guillermo Pérez Monroy.
12. Acta de estado de salud de la actora de fecha 22 de abril del 2017.
13. Acta de apercibimiento artículo 26 Código de Procedimiento Penal de fecha 22 de abril del 2017, efectuada en la Primera Comisaria de Iquique.
14. Acta de reconocimiento de especies /declaración jurada bajo apercibimiento del artículo 210 del Código Penal de preexistencia y dominio /avaluó y devolución de especies, de fecha 21 de abril del 2017, en que se indica el “denunciante de nombre Pedro Garrido Amas”.
15. Acta de lectura de derechos del detenido, de fecha 22 de abril del 2017, de la actora.
16. Informe de diligenciamiento, solicitado en instrucción particular de Oficio SAP-85-2017, hacia Fiscalía Iquique, dirigido al Fiscal Juan Zacarias Zepeda Elgarrista, de fecha 29 de mayo del año 2017.
17. Oficio emitido por Carabineros de Chile de fecha 23 de mayo del 2017, N°175.
18. Boleta de honorario electrónica N°2637, servicios profesionales de la salud, por atención psicológica, de fecha 22 de septiembre del 2017.



19. Transferencia electrónica de fecha 23 de noviembre del 2017, por asesoría jurídica en proceso penal.
20. Transferencia electrónica de fecha 23 de octubre del 2017, por asesoría jurídica en proceso penal.
21. Transferencia electrónica de fecha 16 de agosto del 2017, por asesoría jurídica en proceso penal.
22. Transferencia electrónica de fecha 28 de abril del 2017, por asesoría jurídica en proceso penal.
23. Renuncia voluntaria de fecha 09 de abril del 2018, suscrita en la Dirección del Trabajo.
24. Finiquito de fecha 06 abril del 2018, entre la actora y empresa Comercializadora Fabrica Moisés Iquique Ltda., suscrita ante la Inspección del Trabajo con fecha 12 de abril del 2018.
25. Certificado de fecha 22 de abril del 2017, autorizando Jumbo Supermercado Administradora Ltda., 5 días de permiso de la actora.
26. Finiquito de contrato de trabajo, de fecha 15 de mayo del año 2017, entre Jumbo Supermercado Administradora Ltda., y la actora, suscrito ante la Inspección del Trabajo con fecha 19 de mayo del año 2017.
27. 04 liquidaciones de remuneraciones, de fechas diciembre del año 2016, enero, febrero y marzo del 2017, suscritas por Jumbo Supermercado Administradora Ltda., y la actora.
28. Correo electrónico de fecha 26 de abril del año 2017, enviado por la actora a la “Línea Ética de Cencosud”. Y, respuesta del mismo de fecha 27 de abril del 2017.



29. Presentación de reclamo ante la Inspección del Trabajo. N°101/2017/1109, fecha ingreso 10 de mayo del 2017, más la autorización de poder simple para ser representada en dicha entidad.
30. Declaración jurada de tramitación licencia médica, de fecha 02 de mayo del 2017, constancia N°281, N° de licencia 313994.
31. Orden de reposo Ley N°16.744, N° orden de reposo 3139694, fecha emisión 27 de abril del 2017.
32. Declaración jurada de tramitación licencia médica, de fecha 02 de mayo del 2017, constancia N°282, N° de licencia 3142213.
33. Orden de reposo Ley N°16.744, N° orden de reposo 3142213, fecha emisión 02 de mayo del 2017.
34. Declaración jurada de tramitación licencia médica, fecha 27 de abril del 2017, constancia N°267, N° de licencia 53457786.
35. Copia de licencia médica, en donde indica el inicio -26 de abril del 2017- y término del reposo que duró 15 días.
36. Constancia de N°810, de fecha 27 de abril del año 2017, ante la Inspección del trabajo.
37. Declaración jurada de tramitación licencia médica, de fecha 10 de mayo del 2017, constancia N°294, N° de licencia 3149343.
38. Orden de reposo Ley N°16.744, N° orden de reposo 3149343, fecha emisión 09 de mayo del 2017.
39. Certificado de alta laboral N°2569889, de fecha 16 de mayo del año 2017, suscrito por médico Hugo Solano.
40. Orden de reposo Ley N°16.744, N° orden de reposo 3156575, fecha emisión 16 de mayo del 2017.



41. Resolución de Ejecutoria de fecha 08 de junio del año 2018, en causa RIT 191-2018, RUC 1700375699-8.
42. Sentencia definitiva Absolutoria de fecha 28 de mayo del año 2018, dictada por los jueces Sr. Carlos Contreras Velásquez, Sr. Juan Pozo Araya, y, doña Juana Ríos Meza, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, en causa RIT 191-2018, RUC 1700375699-8.
43. Notificación de resolución del Juzgado de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, de fecha 17 de abril del 2018, a la denunciada fecha 24 de abril 2018.
44. Resolución del Juzgado de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, de fecha 17 de abril del 2018.
45. Acta resumen de audiencia / simplificado sin admisión de responsabilidad, de fecha 23 de enero del 2018.
46. Resolución de fecha 28 de diciembre del año 2017.
47. Acusación efectuada por Fiscal Juan Zepeda Elgarrista, en contra de la actora.
48. Audiencia de aumento de plazo para investigar, fecha 23 de noviembre del 2017.
49. Resolución de fecha 11 de agosto del 2017.
50. Solicitud efectuada en los autos penales, de fecha 09 de agosto del 2017.
51. Resolución de fecha 22 de abril del 2017, en Juzgado de Garantía de Iquique, control de detención.
52. 02 CD grabados.

Documentos acompañados con citación, no objetados.

Testimonial:



A folio 85, comparece Rodrigo Eugenio Ruz López, psicólogo, domiciliado en calle Esmeralda N°771 de esta ciudad, quien legalmente juramentado, señala que como profesional tiene conocimiento de que doña Jocelyn Frez, trabajaba en el supermercado Jumbo, y en el mes de abril fue cuando sucedieron los hechos que dieron origen a una serie de malestares o comportamientos que revisten una conducta ansiosa, evitando hablar de todo aquello que le recuerde el supermercado Jumbo, evitando transitar por su cercanía, asimismo presenta una actitud paranoide, que tiene que ver con la preocupación a los comentarios de otras personas que tienen conocimiento de lo ocurrido. Indica que la demandada tenía una postura física disminuida, voz tenue, ansiosa, triste y con manifestaciones de mucho miedo.

Agrega que es efectivo que a la actora le han provocado un daño, ya que es posible observar en ella un sin número de quejas verosímiles en el ámbito de la salud mental, comprometiendo su funcionamiento global que estaría vinculado a la denuncia hecha en su contra; por otro lado, el testigo señala que efectivamente las demandadas habrían tenido responsabilidad en los daños producidos a la actora, por haber realizado una denuncia falsa en contra de ella, que luego fue ratificado en el juicio penal en donde se comprobó su inocencia.

A folio 86, comparece Nicole Stephany Arrepol Brandt, cajera, domiciliada en Avenida Los Cóndores N°3774, block 1, departamento 303 de la comuna de Alto Hospicio, quien legalmente juramentada expone que efectivamente las demandadas cometieron hechos culposos en contra de la señora Jocelyn, por acusarla de un robo que



nunca cometió, situación que le destruyó su vida matrimonial, la relación maternal con su hija y el autoestima; hecho que dice conocer por haber visto a la demandada y que ésta le habría contado lo sucedido, que la habían tratado como una delincuente, que había pasado toda la noche en un calabozo, le mostró sus brazos llenos de moretones, asimismo le indicó que las Carabineras la habían revisado por todas partes y que al día siguiente, una Gendarme había hecho lo mismo; agrega que en ese momento la señora Jocelyn se puso a llorar y le costaba hablar.

Indica que es efectivo que a la señora Jocelyn la acusaron de un robo que ella no cometió, sino más bien fue una manera fácil de no pagarle sus años de servicio, pero no percibieron el daño y la angustia de una familia y lo difícil que ha sido para la actora la situación, ya que ella no volvió a ser la misma de antes. Hechos que dice saber por los propios dichos de la demandante, ya que al momento de tomarla detenida no se hizo una cuadratura de caja, que pudiera comprobar la falta de dinero por la cual la estaban acusando.

Finalmente, señala que es efectivo que las demandadas tienen responsabilidad en los daños que le provocaron a la señora Jocelyn y a su familia.

A folio 91, comparece Pedro Pablo Peña Sepúlveda, conductor, domiciliado en Avenida Los Cóndores N°3774, block 1, departamento 303 de la comuna de Alto Hospicio, quien legalmente juramentado expone que efectivamente se le produjo un daño a la señora Jocelyn por haberla acusado de un robo en su lugar de trabajo que no cometió, fue acusada injustamente ya que no se realizó un arqueo de caja ni



revisión de cámaras, hechos que dice conocer por los propios dichos de la demandante.

Agrega que la actora era una persona alegre, simpática, con mucha personalidad y después de lo ocurrido su autoestima cayó fuertemente, dejó de participar en muchas actividades y le cuesta encontrar trabajo por su poca seguridad.

A la vez el testigo señala, que a la señora Frez le ofrecieron que renunciara voluntariamente para evitar un juicio en su contra, perdiendo su antigüedad laboral y lo que ello conlleva en lo económico, por lo que ella se negó.

En cuanto a la relación de causalidad indica que esto es efectivo toda vez que la señora Jocelyn era una excelente trabajadora y fue culpada injustamente, denostada lo que la afectó físicamente y psicológicamente por la acusación en su contra.

Por último, señala que es efectivo que los demandados tienen responsabilidad en el daño provocado a doña Jocelyn, por no manejar de buena manera un procedimiento que terminó afectándola, agrega que ella trabajó durante 7 años aproximadamente en el supermercado, siendo una persona intachable, con ganas de aprender y superarse día a día.

DÉCIMO SEXTO: Que la parte demandada a fin de acreditar sus dichos, acompañó los siguientes medios de prueba:

Documental:

1. Set de documentos que contiene: (i) Parte Policial de la Prefectura Iquique N°2, Primera Comisaria de Carabineros de Chile de Iquique, N°05070 de 24 de abril de 2017; (ii) Declaración del Personal de Carabineros efectuada por la



Prefectura Iquique N°2, Primera Comisaria de Carabineros de Chile de Iquique, en relación al parte de detenidos N°05070 de 24 de abril de 2017; (iii) Acta de estado de salud de la detenida Sra. Jocelyn Macarena Frez Ormeño; (iv) Acta de apercibimiento del Artículo 26 del Código de Procedimiento Penal; (v) Acta de lectura de derechos de la detenida; (vi) Instrucción Particular - Informe de diligenciamiento N°614 de 18 de mayo de 2017, de la Prefectura Iquique N°2, Primera Comisaria de Carabineros de Chile de Iquique donde consta el informe de Carabineros de Chile al revisar las grabaciones del día de los hechos.

2. Set de fotografías del día 21 de abril de 2017, donde se logra apreciar la secuencia de hechos al interior del establecimiento comercial y a la demandante Jocelyn Macarena Frez Ormeño.

Documentos acompañados con citación, no objetados.

Testimonial:

A folio 88, comparece Augusto Antoni López Letelier, ingeniero, jefe de control interno, domiciliado en Avenida Héroes de la Concepción N°2855 de la ciudad de Iquique, quien legalmente juramentado expone que no es efectivo que las demandadas cometieran un hecho doloso o culposo en contra la actora, dado que Jumbo tiene una política de buen trato al personal, y siempre se actuó bajo esa primicia durante toda la instancia de su retención y hasta la llegada de Carabineros, ya que mediante las cámaras de seguridad se observó a la afectada ocultar un monto indeterminado de dinero entre su ropa, por lo que se procede a hablar con la actora y se le pide ir a las instalaciones del control interno; todo ello fue de manera tranquila y



sin presentar resistencia a la espera de la resolución del administrador.

Una vez que llega el personal de Carabineros, se procede a verificar las grabaciones de las cámaras, constando la sustracción de un monto indeterminado, por lo que Carabineros le pide a la afectada la entrega del dinero, a lo que ella se niega y tampoco permite ser revisada por el personal femenino de las guardias de seguridad, ya que Carabineros llegó sin personal femenino, por lo que ellos deciden trasladarla a la Primera Comisaria para continuar con el procedimiento. Agrega que en cuanto al peritaje realizado por Carabineros, este coincide con lo observado por el personal de control interno.

En cuando a la cuadratura de caja antes de llamar a Carabineros, indica el testigo que esto no se llevó a cabo en ese momento, toda vez que eso se realiza en la madrugada del día siguiente por la propia jefe de cajas, haciendo presente que los dineros sustraídos no presentaban vouchers, lo que indica que no fueron declarados al sistema contable del local.

Refiere que la actora fue absuelta, ya que se basaron en el resultado de la cuadratura de caja y no lo observado por las cámaras de seguridad.

Indica que no es efectivo que se le haya provocado algún daño a la actora, ya que siempre se han caracterizado por el buen trato al personal, independiente de las circunstancias que se puedan presentar en el momento, por lo tanto, tampoco existiría una relación de causalidad y respecto a la responsabilidad de la demandada en los



daños provocados a la actora, señala que esto no es efectivo, pues siempre hubo un buen trato.

Por último, en cuanto al trato recibido por la señora Frez por parte del personal de Carabineros, expone que lo desconoce, como asimismo desconoce que no se encontró ningún dinero en poder de la afectada.

A folio 92, comparece Pedro Fernando Garrido Amas, encargado de control interno, domiciliado en Avenida Héroes de la Concepción N° de la ciudad de Iquique, quien legalmente juramentado expone, que estuvo presente junto a Jocelyn en el traslado desde la guardia hasta la oficina de control interno y en ningún momento recibió maltrato; en cuanto al daño producido a la actora, señala que esto no es efectivo; pero desconoce si Carabineros utilizó la fuerza en su contra ya que eso escapa de sus manos.

Respecto a la cuadratura de caja, indica que aquello se podía realizar al día siguiente, pero luego doña Elizabeth González, jefa de la señora Frez, manifestó que al realizar el arqueo no faltaba ningún dinero como se indicaba en la denuncia.

En cuando a la relación de causalidad señala que esto no es efectivo, debido a que existe un peritaje realizado por Carabineros quienes indicaron que la señora Jocelyn había ocultado la especie entre su vestimenta.

Comparece Alan Suarez Capello, asistente de control internos, domiciliado en Edificio Agua Marina II, departamento 2302 de la ciudad de Iquique, quien legalmente juramentado expone que no es efectivo que la señorita Frez haya recibido un mal trato, lo cual dice saber porque fue él quien acompañó a Carabineros a la sala de



espera donde estaban las cámaras, luego al ver las grabaciones pudo constatar que la actora se guardaba el dinero entre sus ropas, como así también lo pudo constatar la señora Melena, jefa directa de caja, por lo tanto, se realizaron los trámites para entregar los respaldos a Carabineros, quienes se llevaron a la señora Jocelyn en calidad de detenida.

Audiencia de percepción documental

A folio 127, se llevó a cabo la audiencia de percepción documental, con la inasistencia de la parte demandante, la asistencia de la parte demandada Cencosud Supermercados S.A., Cencosud Retail S.A, Jumbo Supermercados Administradora Limitada y Jumbo Administradora Norte S.A., todas representadas por el abogado Marco Antonio Hernández Guiza y en rebeldía de los demandados Liliam Adela Bracho Osvaldo y Alex Patricio Romero Esparza, procediendo a abrir el sobre de custodia N°2447, el cual contiene un pendrive, en donde se deja constancia de su contenido el cual corresponde a un set de 76 fotografías, 3 videos, programa de reproducción, denominado “Smart player”.

DECIMO SEPTIMO: Que, afrontando el análisis del fondo de la cuestión debatida, se debe señalar que la acción ejercida por la demandante es la de indemnización de perjuicios, fundada en las normas de la responsabilidad extracontractual civil, contenidas en el Título XXV del Libro IV del Código Civil, siendo menester señalar que el inciso primero del artículo 2329 de dicho cuerpo legal prevé: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.



DECIMO OCTAVO: Que, en efecto, son presupuestos de la responsabilidad extracontractual, que deben concurrir de manera copulativa, los siguientes: a) Capacidad, e Imputabilidad del hecho a su autor; b) Existencia de un hecho ilícito, ejecutado con dolo o con culpa; c) Existencia de un daño; d) Relación de causalidad entre el hecho generador y el daño ocasionado.

DECIMO NOVENO: Que para determinar la procedencia de la pretensión de la actora, y por lo mismo la existencia de la mencionada responsabilidad extracontractual de parte de la demandada, se hace necesario verificar la concurrencia de manera copulativa de los presupuestos enunciados en el considerando anterior, los que deben ser acreditados por la parte demandante, toda vez que son el fundamento de la obligación indemnizatoria cuya existencia y cumplimiento reclama, principio probatorio, este último, que se desprende del artículo 1698 de nuestro Código Civil.

VIGÉSIMO: Que respecto al primero de los requisitos citados, la capacidad de las demandadas, al ser la capacidad la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, y al no haberse alegado hipótesis de incapacidad alguna, se da por cumplido.

VIGESIMO PRIMERO: Que en cuanto a la existencia de un hecho ilícito, del tenor de la demanda se desprende que los hechos que sirven de fundamento a la misma, consisten en un supuesto actuar doloso de las demandadas, quienes en palabras de la parte demandante: “evidentemente generaron un magno daño al inculparla de algo que ella jamás cometió, dañándola al punto de tener que cargar un poco más de un año con una falsa acusación”.



En ese escenario, a partir de los escritos fundamentales de las partes, se advierte que el supuesto hecho generador de responsabilidad estaría dado por la conducta de las demandadas, en el contexto del procedimiento en el cual resultó absuelta la imputada - demandante en estos autos -, conducta que comenzó con la denuncia efectuada por personal del supermercado, con la posterior detención por parte de personal de Carabineros y, luego con la consecuente prosecución de un juicio penal en el que como se dijo, la demandante fue absuelta.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en relación con la primera conducta atribuida a la demandada, esto es, el hecho de haberse efectuado la denuncia que dio origen al proceso penal, puede verificarse que, según consta en el parte policial que dio origen a la detención de la actora de marras, la denuncia fue realizada por doña Lilian Adela Bracho Osvaldo y don Alex Patricio Romero Esparza el día 22 de abril del año 2017, quienes se desempeñaban como guardia y como asistente de control interno de monitores respectivamente, en relación con una situación de hecho por ellos detectada, en el ejercicio de sus funciones, en dependencias del Supermercado Jumbo, y que estaría dada por la supuesta sustracción de una suma de dinero desde la zona de la pre bóveda de dicho recinto, situación que habrían detectado a través del monitoreo de las cámaras de vigilancia. En efecto, en el parte policial se consignan los nombres de los dependientes presentes en las diligencias, ya individualizados supra, dando cuenta de la forma como habrían tomado conocimiento de los hechos, y cómo requirieron el auxilio de personal policial.



VIGÉSIMO TERCERO: Que respecto del particular, ningún reproche puede efectuarse a estos dependientes de la demandada, toda vez que, su actuación significó poner en conocimiento de la autoridad competente un hecho que, a su juicio, revestía caracteres de delito, sin que pueda atribuirse a dichos trabajadores responsabilidad en las consecuencias de la denuncia – esto es, detención de la actora y posterior juicio penal –, puesto que dichas consecuencias estuvieron dadas por el mérito que, hasta entonces, podía atribuirse a los hechos percibidos, que en ese instante daban cuenta de la posible sustracción de dinero.

VIGESIMO CUARTO: Que respecto de la alegación de la demandante en orden a haber vivenciado un proceso en el ámbito penal, este hecho de ninguna manera puede ser calificado en la especie como un ilícito culpable o doloso, que pueda ser generador de la responsabilidad reclamada por la actora.

A juicio de esta juez, las demandadas, en especial la empresa denunciante en el contexto de este proceso penal seguido en contra de la demandante en esta causa, únicamente obró en el ejercicio de los derechos que la legislación procesal penal contempla, sin que haya incurrido en alguna conducta que pueda estimarse dolosa o negligente, por las razones que se ha expresado.

Que a mayor abundamiento, y sin perjuicio de no haberse alegado ni de encontrarse expresamente consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, se debe tener presente que nuestra doctrina ha recogido la Teoría del Abuso del Derecho. Así, la posición sustentada por el profesor Arturo Alessandri Rodríguez, que en general es la que han seguido los autores que tratan la materia, refiere que el abuso del



derecho, es la aplicación a una materia determinada de los principios que rigen la responsabilidad delictual y cuasidelictual civil: ese abuso no es sino una especie de acto ilícito. Debe, por tanto, resolverse con arreglo al criterio aplicable a cualquier hecho ilícito: habrá abuso de derecho cuando su titular lo ejerza dolosa o culposamente, es decir, con intención de dañar, o, sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios (Alessandri Rodríguez, Arturo: De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno, 2da edición, Ed. Ediar Conosur, Santiago de Chile, 1983, p. 261) En similar sentido, don Enrique Barros Bourie sostiene que por la sola aplicación de las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual (artículos 2314 y siguientes) resulta obligado a indemnizar quien en ejercicio abusivo de su derecho daña a otro, sea que haya actuado con dolo, sea que simplemente haya incurrido en notoria desconsideración de un deber implícito de cuidado (culpa) (Barros Bourie, Enrique: Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006, p.611 y ss.).

Así las cosas, habiéndose examinado el contenido de la documental rendida, esta sentenciadora no ha podido formarse convicción en cuanto a que las actuaciones desplegadas por las demandadas, hayan sido efectuadas con la intención de dañar a la actora, o sin la diligencia debida, sino que, obedecieron a la íntima convicción de estar obrando en el legítimo derecho de los ejercicios conferidos por las leyes, particularmente, la legislación procesal penal.

VIGESIMO QUINTO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado por la actora el hecho ilícito culpable, ni menos doloso por



la demandada, esta sentenciadora rechazará la acción, en todas sus partes, según se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

VIGÉSIMO SEXTO: Que dados los requisitos que hacen procedente el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, ya indicados en el motivo décimo octavo del presente fallo, y, habiéndose estimado que no concurre en la especie el requisito signado con la letra b) de dicho apartado, se omitirá pronunciamiento sobre los restantes elementos de la acción.

VIGÉSIMO SEPTIMO: Que la restante prueba aportada en nada altera los razonamientos precedentes.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170 y 341 del Código de Procedimiento Civil; 2314, 2315, 2316 y demás pertinentes del Código Civil, **SE DECLARA:**

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

A.- Que **SE RECHAZA** la tacha formuladas por la parte demandada respecto del testigo Rodrigo Eugenio Ruz López, a folio 85.

B.- Que **SE RECHAZAN** las tachas formuladas por la parte demandante respecto de los testigos Alan Suarez Capello, Pedro Fernando Garrido Amas y Augusto Antonio López Letelier, a folios 92 y 88.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

A.- Que **SE RECHAZA** la demanda de indemnización de perjuicios deducida en lo principal de folio 1, por doña **STEPHANIE GALLARDO ALARCÓN**, Abogada, en representación de doña **JOCELYN MACARENA FREZ ORMEÑO** en contra de **CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A., CENCOSUD RETAIL S. A., JUMBO**



SUPERMERCADO ADMINISTRADORA LTDA, JUMBO ADMINISTRADORA NORTE S.A., todos representados por el Sr. Hugo Oyarzo Castro, y en contra de doña **LILIAN ADELA BRACHO OSVALDO**, desconoce profesión u oficio, y de don **ALEX PATRICIO ROMERO ESPARZA**.

B.- Que no se condena en costas a la actora, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Rol 3233-2018

Dictada por doña **PATRICIA ALEJANDRA SHAND SCHOLZ**, Juez Titular de este Segundo Juzgado de Letras de Iquique.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Iquique, siete de abril de dos mil veinte**.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>